

Javier Rosas  
Silvia Dupont

## 2. 1976: hacia una aparente rectificación del régimen

En los círculos financieros y políticos del país, desde mediados de agosto de 1976, la devaluación se ha convertido en el tema de actualidad, paralelamente a los comentarios sobre el inevitable cambio de gobierno que se llevaría a efecto meses más tarde.

A partir del último informe presidencial, los comentarios se hicieron extensivos a todo el resto de la población mexicana. Los debates se centraron en torno a los daños que ocasionaba la devaluación a los intereses económicos de los diversos grupos sociales. El consenso fue unánime: el 99 por ciento de la población vio reducida su capacidad de compra en un 62 por ciento, excepción hecha de aquellos privilegiados que tuvieron acceso a los secretos financieros del Estado y lograron poner a salvo sus ahorros al cambiarlos por moneda extranjera. De cualquier manera, tanto unos y otros estuvieron de acuerdo en que la causa principal del desastre monetario para el país era la mala administración del gobierno de Echeverría; esto es, despilfarro del gasto público, inversiones improductivas, "incremento incontrolado en costos de administración y dispersión en políticas de gasto e inversión".

Felizmente para los sectores que en forma más ardua criticaron la devaluación, el remedio estaba al alcance de la mano: el cambio de gobierno en los próximos tres meses. Todos esperaban —y esperan— con la nueva administración un cambio en la política presupuestal, en tanto que la anterior había causado gran desconfianza en el mundo de los negocios y provocado inseguridad para la inversión privada, rompiendo la tradicional armonía entre empresarios y gobernantes, sinónimo de estabilidad política y desarrollo económico.

En este ambiente de consenso nacional respecto a las acusaciones contra el régimen de Echeverría, difícilmente progresan los análisis serios sobre el carácter político del pasado gobierno, en especial porque se ha olvidado la idea de que la sociedad mexicana no está al margen ni de la historia del capitalismo ni de las contradicciones sociales.

Sigue existiendo unanimidad a propósito de la idea de armonía y unidad entre todos los mexicanos ("la solución..."), sin concebir que nuestro desarrollo social se encuentra escindido en dos grandes polos contradictorios y determinado por éstos: el sector monopolístico avanzado y el sector monopolístico atrasado; cada uno de ellos incluye su propio sector político al interior del Estado.

Nuestra hipótesis para tratar de dilucidar la conflictiva que subyace detrás del antagonismo ocasionado por la devaluación es que, efectivamente, en los pasados seis años la política echeverrista generó desconfianza y profunda insatisfacción, mas no hacia toda la sociedad, sino solamente en aquellos sectores opuestos al proyecto de capital monopolista de Estado que encabezaba el mismo Echeverría. En efecto, nosotros ubicamos la política echeverrista como representativa de los intereses del sector monopolístico avanzado de nuestra economía. El enfrentamiento entre estos dos grandes grupos capitalistas fue lo que dio origen a la devaluación, con la consecuente crisis que afectó a casi todos los sectores sociales del país, y no como hasta ahora se ha dicho, debido a la incapacidad de unos cuantos dirigentes para armonizar lo que de suyo es "inarmonizable".

Es en este contexto de lucha de clases al interior de las altas esferas políticas y financieras en torno al cual hacemos algunas reflexiones.

Profundizando en el análisis, desde lo meramente declarativo (ideologías del sector empresarial) hasta la crisis de confianza en los valores del gobierno (efectos negativos de la devaluación), puede observarse que en realidad la devaluación monetaria no es la causa última de la actual crisis nacional, sino sólo el fenómeno visible —el iceberg que sobresale a la superficie dejando nueve décimas partes escondidas bajo el agua— de la profunda problemática interna que vive el país desde los comienzos del régimen pasado.

Aparentemente todo se inició en el mes de junio de 1976, a partir de los rumores de una posible devaluación, desmentida en forma rápida y enfática por el entonces secretario de Hacienda. Estas presunciones se apoyaban en los análisis de la iniciativa privada que habían visto descender de manera considerable el volumen de las exportaciones y los ingresos por concepto de turismo, simultáneamente al incremento de los empréstitos desde el extranjero y del valor de las importaciones.

En lo que respecta a la balanza comercial de nuestro país, durante los meses de enero a septiembre de 1976, el déficit llegó a 29 652 millones de pesos, cifra que a pesar de ser menor que el déficit correspondiente al mismo lapso 1975 (32 426 millones de pesos) significa el enorme desvalance que el gobierno tuvo que hacer frente para equilibrar su balanza de pagos a través de la contratación de empréstitos con el extranjero.

La enorme necesidad de la industria mexicana de importar mayores volúmenes de máquinas y artefactos mecánicos, aparatos electrónicos y partes automotrices a lo largo de 1976 ensanchaba el déficit. Sin embargo, lo terrible del desequilibrio comercial y la frágil situación para compensar la deficitaria balanza de pagos consistía no tanto en las posibilidades para exportar mayores cantidades de petróleo crudo, azufre y productos agrícolas —que en promedio habían crecido entre un 50 y 100 por ciento durante 1976—, sino en que la principal fuente de ayuda al gobierno mexicano para equilibrar su balanza de pagos (desajustada en 3 600 millones de dólares) —la gran banca republicana de los Estados Unidos: el Chase Manhat-

tan Bank y el Bank of America, propiedad de las firmas Rockefeller, Warburg & Schiff, principales acreedores de la deuda pública mexicana— comenzó a negarse desde julio del 76 a conceder a nuestro país mayores préstamos que generasen inflación.

En el contexto de la economía internacional, en pleno periodo de recesión, se empezó a adoptar como estrategia para resolver la crisis económica la austeridad y la depresión en el gasto público, principalmente en los países industrializados. En efecto, el gobierno conservador de Gerald Ford, apoyado en la reaccionaria teoría económica de Milton Friedmann y respaldado por el poder financiero de la banca Rockefeller, empezó a presionar a las dependientes economías latinoamericanas para que asumieran una posición similar: la no generación de empleos, la disminución del fomento a la productividad, la paralización de los gastos de beneficencia social y la restricción de todo género de gasto público que no fuese absolutamente indispensable para la seguridad del Estado y para el mínimo funcionamiento de las inversiones privadas.

Las nuevas condiciones en los empréstitos hacia México fueron en este sentido: en primer lugar, la no promoción de las actividades productivas del Estado como una medida para evitar el aumento de la inflación de la que, finalmente, el gobierno no era culpable directo, sino los sectores más conservadores del ámbito empresarial, quienes especularon con los beneficios del gasto público sin promover mayores volúmenes de productividad.

En segundo lugar, el abandono de la política gubernamental para la creación de nuevas industrias paraestatales, cuyo eficiente funcionamiento generase nuevos recursos públicos que apoyarían al sector monopolístico avanzado que opera en el país, tanto para el mercado interno como para la exportación, en detrimento de los sectores conservadores del gran capital que, casualmente, se encuentran en situación desventajosa para ganar mercados en una economía mundial deprimida.

En tercer lugar, el abandono de la política del gasto público en beneficio directo de los sectores monopolísticos avanzados, opuestos al grupo conservador, quienes gozaban de numerosas concesiones de ventas al gobierno con elevados márgenes de ganancia; igualmente participaban, en provecho directo, de una política discriminatoria de precios que los convertía en los máximos y mayores especuladores de la inflación nacional; por último, estos sectores se beneficiaban extensamente con la ampliación del mercado de compra obrero y campesino, en detrimento de la tradicional capacidad de consumo de la clase media mexicana.

Esta última idea —que constituye sólo una hipótesis de trabajo difícilmente comprobable, dada la ausencia de estudios de mercado— ha sido sugerida con base en el siguiente indicador: el aumento en un 196 por ciento de los salarios mínimos del obrero desde 1971 a la fecha, además del mejoramiento de su nivel de vida, logrado gracias a la inversión del Estado en gastos de beneficencia social, así como por el considerable incremento de los precios agrícolas en beneficio directo de la capacidad de compra de

ciertos grupos campesinos. Esto sólo pudo lograrse gracias al apoyo discriminado en dichos precios por parte del Estado, y con los enormes subsidios obtenidos —vía impuesto sobre la renta— de los grupos urbanos de medianos y altos ingresos, baluarte tradicional de apoyo político a los sectores conservadores del gran capital.

En síntesis, la gran banca republicana de los Estados Unidos tenía dos importantes motivaciones para presionar al cambio en la política económica de nuestro gobierno, a través de los créditos tan necesarios para el mantenimiento a flote de nuestra dañada economía a causa de la recesión internacional: la primera de ellas consistía en reducir el gasto de las naciones, tanto industrializadas como atrasadas (véanse los casos de Inglaterra y Argentina), mediante mecanismos crediticios, tales como los empréstitos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional para el Desarrollo y del Banco Mundial, para resolver la crisis recesión-inflación del capitalismo internacional.

La segunda motivación era modificar la tendencia hacia el desastre económico que amenazaba a los sectores atrasados del gran capital, tanto por la disminución de sus contratos gubernamentales y la falta de autorización para aumentar sus precios de venta, como por la caída de la demanda en el consumo de sus productos por parte de los grupos medios, quienes vieron mermada su capacidad de compra debido al aumento en los precios de los productos de consumo básico y suntuario y por el incremento en el gravamen a sus ingresos. Secundariamente, también resultaron afectados en la baja de sus ventas, por las mismas razones, los sectores del pequeño y mediano capital. Esto condujo a la retracción de la inversión.

Al respecto se pueden ver las siguientes cifras, correspondientes a los primeros meses de 1976: la industria alimenticia del país mantuvo un crecimiento mínimo desde 1974 del 0.4 por ciento; la textil decreció en un —2.1 por ciento; las industrias de línea blanca y aparatos eléctricos para el hogar se incrementaron en un irrisorio 0.2 por ciento; las de papel y celulosa disminuyeron su producción en un —1.5 por ciento, y la industria automotriz descendió en un porcentaje de —3.7.

Los antecedentes visibles de este conflicto datan de finales de 1972 con el fracaso de la reforma fiscal, que pretendía gravar, con elevados impuestos semejantes a los de países industrializados, a la clase empresarial del país. Esto constituyó el primer intento fallido en la política echeverrista de redistribución del ingreso. Ante este fracaso, el segundo intento fue un aumento selectivo de precios y de impuestos sobre la renta a las clases medias. Resultado: una inflación promedio del 20 por ciento anual a partir de entonces.

Como la espada de Damocles, la inflación trajo consigo dos efectos contradictorios: por un lado —como se mencionó anteriormente— benefició al proyecto de Echeverría al permitir el aumento en la tasa y volumen de ganancia para los sectores avanzados del capital financiero en el país (Banca Morgan, Vanderblit, Rothschild y S. Bleichroeder), a través de la amplia-



ción del mercado de consumo obrero y campesino. Por otra parte, tuvo un efecto negativo: el incremento en los precios agrícolas que elevó considerablemente el precio de la fuerza de trabajo —el aumento de salarios con que Echeverría reivindicó a los obreros— y los altos precios logrados por el sector avanzado del capital monopolístico al interior del país, hicieron crecer los precios nacionales y con ellos los de productos para la exportación en más del doble con respecto a los precios internacionales, desequilibrando aún más la deficitaria balanza comercial mexicana y forzando al gobierno a recurrir a endeudamientos cada vez mayores con la banca conservadora en el extranjero y sus agentes locales en el país, abriendo así la posibilidad de las presiones políticas que modificaron el rumbo de nuestra política económica, de la cual la devaluación es el reconocimiento oficial y el inicio de este viraje.

La paradoja del gobierno de Echeverría consistió en la relación directamente proporcional que se estableció entre, por un lado, su política de redistribución del ingreso y, por el otro, el agigantamiento cada vez más agudo del déficit de la balanza de pagos, cuestión que colocó al régimen en una posición en extremo sensible a las presiones del exterior. Las necesidades del gobierno para equilibrar este déficit fueron satisfechas mediante la contratación de empréstitos extranjeros que se elevaron de 27 000 millones de pesos en 1971 a 260 000 en 1976,<sup>1</sup> lo que significa un incremento casi diez veces mayor en el valor de la deuda pública durante un lapso de sólo cinco años.

El *Wall Street Journal* comentó el pasado 22 de noviembre que la política de distribución del ingreso del proyecto echeverrista era

*...el punto central de un plan ambicioso denominado "crecimiento compartido", para tratar de rectificar, en sólo seis años, las iniquidades económicas y sociales que estaban enconadas desde hace varias décadas.*

Sin embargo el resultado de este plan fue la caída del peso, como advertencia a las economías dependientes de lo que suele ocurrir cuando un país intenta ir demasiado lejos caminando aprisa.

A propósito del carácter distributivo de la riqueza en el régimen pasado, el *Wall Street* afirma que

*...Echeverría destinó vastas sumas de dinero para hospitales, escuelas y carreteras, principalmente en las regiones rurales, descuidadas desde antaño. Estableció cientos de nuevas empresas descentralizadas y paraestatales para mejorar todo, desde los precios de los alimentos y el turismo, hasta la calidad del aire en las ciudades y el ritmo de nacimientos.*

*En consecuencia, el país ha duplicado su capacidad para producir petróleo crudo, electricidad, fierro y acero. Los programas sociales han me-*

<sup>1</sup> El 18 de diciembre el nuevo secretario de Hacienda afirmó que la deuda pública externa ascendía a 20 000 millones de dólares, es decir, 410 000 millones de pesos a precios actuales.

*porado la vida de incontables mexicanos en manera tal que no puede ser cuantificada. Pero muchos de estos logros fueron obtenidos alimentando, a la fuerza, la economía.*

A partir de 1971 la contradicción determinante al interior de los grupos dominantes en la sociedad mexicana ha sido la existente entre el grupo echeverrista de gobierno, que ha intentado realizar un proyecto de capital monopólico de Estado, en beneficio directo de los sectores avanzados del gran capital financiero y sus agentes locales (Banamex, Bancomer y Somex), en oposición a los grupos de gobierno cuya política se plantea en defensa de los intereses del sector monopólico atrasado (Blymsa, Comermex, del Atlántico e Internacional).

La política económica de Echeverría consistía en disponer de enormes erogaciones para apoyar las gigantescas inversiones a largo plazo en bienes de capital y bienes de consumo para la exportación, que los grupos monopólicos avanzados intentaban lograr en México. Para ello, el presupuesto del gobierno anterior creció seis veces y las empresas del Estado, con un alto nivel de eficiencia productiva, crecieron ocho veces.

De 1970 a 1975 las inversiones productivas del Estado se incrementaron en un 240 por ciento. Este gasto público se logró incurriendo en enormes déficits presupuestales que, hacia fines del sexenio, totalizaron los 306 901 millones de pesos. De este total, el 53 por ciento fue obtenido a través de préstamos con el extranjero; un 35.2 por ciento, por medio de créditos de la banca nacional, y el restante 11.75 por ciento, vía emisión de moneda a través del Banco de México.

Para financiar nuevas y eficientes empresas paraestatales el gobierno incurrió en grandes préstamos con la banca nacional, encaje legal,<sup>2</sup> mermando de esta manera enormes cantidades de recursos tradicionalmente disponibles para la iniciativa privada;<sup>3</sup> simultáneamente, al elevarse en forma considerable las tasas de interés del crédito bancario, su obtención resultaba cada vez más difícil para los empresarios mismos.

Además, por su parte, el gobierno tenía acceso a grandes volúmenes de préstamos desde el extranjero, en óptimas condiciones (a largo plazo y con bajas tasas de interés), recursos que también empleaba para el financiamiento de empresas paraestatales, cuya productividad serviría de apoyo a la producción monopólica avanzada. Estas empresas públicas, si bien no competían directamente con la industria privada por el mercado nacional, sí constituían un claro indicio del abandono de la tradicional y reaccionaria política económica de los anteriores gobiernos, cuyos objetivos principales eran absorber las pérdidas de las empresas atrasadas; elevar la tasa de ga-

<sup>2</sup> El encaje legal se encuentra en lo que el gobierno consideró prioridades del Estado, o sea que no está ocioso ni disponible para la iniciativa privada (Fernández Velasco, director del Consejo Coordinador Empresarial, CCE).

<sup>3</sup> El encaje legal, mantenido de 1960 a 1970 a un nivel promedio de 4 000 millones de pesos anuales, pasó a 35 000 millones en 1975, es decir, nueve veces el promedio anterior.

nancia de las mismas —no obstante su carácter más especulativo que productivo—; proporcionar una infraestructura económica a sectores que no devolvían ningún beneficio al Estado y, por último, rescatar empresas privadas al borde de la quiebra para después venderlas de nuevo a sus antiguos dueños.

Por el contrario, en el régimen de Echeverría, tanto la infraestructura estatal como los grupos económicos a quienes principalmente iba dirigido este aparato de apoyo productivo tendrían como función el producir mayores volúmenes, en especial para la exportación, con el consiguiente aumento de empleos y mayores salarios para los trabajadores.

A medida que los recursos bancarios del país desaparecían del mercado de crédito, las inversiones del sector privado débil y atrasado se retrajeron, ya que además el gobierno ni les compraba ni las subsidiaba.

Como un claro indicador, tanto del estancamiento de la inversión privada como del aumento de las inversiones públicas, podría señalarse que en relación al sexenio 64-70 el porcentaje de aquélla se mantuvo constante e, incluso, disminuyó relativamente con respecto al incremento del PNB logrado durante el régimen echeverrista. En cambio, la inversión gubernamental se duplicó, al pasar del 17.1 por ciento en 64-70 al 34.1 por ciento en los últimos seis años.<sup>4</sup>

Este crecimiento en la economía nacional provocó un aumento en el circulante monetario, destinado a apoyar las operaciones de transacción mercantil en porcentajes anuales que fluctuaron desde el 20 hasta el 42 por ciento en algunos casos. Las enormes emisiones de moneda, cuyo objetivo era apoyar mayores volúmenes de venta de mercancías y lograr un aumento en la velocidad de las operaciones de compra-venta —cuestión tan difícilmente comprensible para los sectores profanos a las altas finanzas— fueron utilizadas como armas de fácil ataque por los sectores políticos opuestos al régimen de Echeverría para acusarlo de fraude monetario, vía emisión de billetes sin el correspondiente respaldo legal en metálico y divisas extranjeras, provocando, según ellos, una inflación incontrolada.

Seramente dañados por la política echeverrista, los opositores se apoyaron en los efectos negativos de la inflación —cuyas causas reales fueron señaladas antes— para justificar sus ataques contra el régimen, reduciendo todo el problema de la misma al fraude monetario y a un supuesto despilfarro del gobierno.

Según los acusadores, la inflación generó un aumento en los precios nacionales del 20 al 25 por ciento anual y una disminución en la demanda del consumo interno, de tal manera que provocó la caída de las ganancias y la reducción en las inversiones privadas. Esto, a su vez, trajo consigo la desconfianza y el temor entre los inversionistas, dando así lugar a la huida de capitales. Consecuentemente, tanto el incremento de la inversión pública —en sustitución de las inversiones privadas retraídas— como el aumento

<sup>4</sup> En 1976 la inversión pública ascendió a 110 000 millones de pesos y representó un 60 por ciento de la inversión total.

de los precios, a la par que generar descontento entre las masas, obligaba al gobierno a endeudarse cada vez más para mantener su desenfrenada política de inversiones a un nivel en el que solamente el pago de los intereses por concepto de la deuda pública externa —que en 1975 ascendió hasta 850 millones de dólares— ponía en peligro la balanza de pagos y, con ello, el desarrollo económico nacional.

Entre los diversos pretextos que los empresarios antiecheverristas utilizaron hacia julio del '76, para justificar la agudización de la creciente huida de capitales —que en sólo ese lapso llegó hasta 5 000 millones de dólares—, se esgrimieron como argumentos: un déficit comercial de más de 18 000 millones de pesos, hasta esas fechas; una crisis en la banca privada provocada por la baja de reservas, iniciada a partir de la fuerte demanda de dinero que depositantes temerosos y desconfiados produjeron, motivados por una ola de rumores tendenciosos, y, finalmente, un descomunal aumento en el circulante monetario, provocado por una mayor demanda de los consumidores al efectuar compras de pánico lo que, extraoficialmente, devaluó aún más el valor de la moneda nacional.

Hacia el mes de agosto el gobierno se encontró repentinamente sin reservas monetarias que respaldasen el valor del peso, viéndose obligado a devaluarlo y a reconocer que, con esta medida, quedaba imposibilitado para la obtención de nuevos préstamos, tan necesarios a su proyecto, y obligándose también a detener las importaciones de bienes de capital para sus empresas.

La oposición había triunfado. El nuevo gobierno estaría obligado a rectificar la política de su predecesor.

Días después del último informe presidencial, que anunció la devaluación oficialmente, el gobierno aceptó todas las condiciones que la banca rockefelliana le había propuesto para el otorgamiento de los créditos que mantendrían a flote la balanza de pagos. Por boca del director del Fondo Monetario Internacional, H. Witteveen, fueron señaladas dichas condiciones, consistentes en la aplicación que México debería hacer de un programa de austeridad en el gasto público: disciplina en los egresos, disminución en las restricciones al crédito interno privado, restricciones al consumo de la clase obrera vía congelamiento de salarios y menor acceso del gobierno al crédito de la banca privada.

El gobierno echeverrista, al que sólo le restaban tres meses de existencia, aceptó. Inmediatamente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional para el Desarrollo y el Banco Mundial, otorgaron un crédito al Estado mexicano por 1 200 millones de dólares, al mismo tiempo que el Bank of America concedía otro por 800 millones. Por su parte, el Chase Manhattan Bank anunció en el mismo mes de septiembre que en 1977 aumentaría sus inversiones en México en más de un 20 por ciento.

Los analistas opositores al régimen señalaron que de ahí en adelante el ahorro interno del país no sería obtenido mediante gravámenes a los sectores pudientes ni a través de los préstamos extranjeros al gobierno, sino que se conseguiría por intermedio de las inversiones directas de la banca extran-



jera y con los capitales especulativos enviados al exterior y que ahora volvían acrecentados, gracias a la devaluación y atraídos por las altas tasas de interés que prometía el nuevo gobierno.

Las garantías del no regreso a la política echeverrista serían: detención de la política de reparto agrario y de aumento de salarios; aplicación de una reforma administrativa —en sustitución de una reforma fiscal profunda— que dejase intacta la corrupción y el silencio oficial; congelamiento de la política de beneficencia social, y abandono de la política de gobierno para la ampliación de importaciones, por la de sustitución de importaciones.

A cambio de ello, el país podría obtener cuantiosas inversiones que busquen ganancias fáciles a través del aumento en la explotación del obrero y mediante la transferencia de los recursos públicos al sector privado.<sup>5</sup> Igualmente, México gozaría de los beneficios del turismo norteamericano de clase media, que aprovecharía la sobrevaluación del dólar sobre el peso mexicano.

A partir del discurso de toma de posesión, el primero de diciembre pasado, el nuevo jefe de gobierno ha venido confirmando, en líneas generales, la rectificación de la política de gobierno de los últimos seis años en los términos siguientes:

1. Mantenimiento del gasto público al mismo nivel que el año anterior, en números relativos (control presupuestal);

2. Reducción de la expansión monetaria, esto es, disminución del circulante; reducción del encaje legal de la banca, y aumento en las tasas de interés bancario para una mayor captación de recursos, lo que en resumen se denomina política deflacionaria;

3. Control de salarios o congelamiento relativo en los aumentos salariales;

4. Incremento en los precios de los productos para el mercado interno, sacrificando los precios de la producción campesina;

5. Paralización de la política de mayores endeudamientos con el extranjero; detención de todo género de reforma fiscal que incluya nuevos gravámenes que afecten a los grupos de altos ingresos. Obtención de nuevos recursos a través de medidas eficientes en la recaudación fiscal (suponiendo que los grupos medios y empresariales buscasen nuevas formas de evadir los gravámenes, el gobierno se vería obligado a buscar mayores endeudamientos con el extranjero para evitar la parálisis de la economía nacional. Si, por el contrario, el régimen decide seguir la línea económica propuesta por Milton Friedmann, acerca de la paralización de las inversiones del Estado en momentos claramente recesivos para la economía nacional, dada la ausencia de inversión privada, tal política deflacionaria conduciría al desem-

<sup>5</sup> Al estar en prensa este artículo se dio a conocer el convenio entre el gobierno —a través del secretario de Patrimonio Nacional— y el sector privado, en el cual el nuevo régimen se compromete a mantener grandes flujos de compra con sus tradicionales proveedores (bienes de consumo).

pleo masivo, a salarios irrisorios y a la instauración de la represión por parte de los grupos militares);

6. Fomento y expansión de la producción destinada al mercado interno y caída de las exportaciones, clausurando simultáneamente las posibilidades a la importación en gran escala;

7. Redistribución de los ingresos de los sectores medios relacionados con el mercado interno y con la producción del capital monopolístico atrasado;

8. Apoyo del Estado a la política de exportación de energéticos para favorecer al sector atrasado del capital monopolístico norteamericano (Banca Rockefeller: Standard Oil), y para allegarse nuevos recursos tendientes a la creación de nuevos empleos y al fomento del consumismo de los grupos medios;

9. Mayor desempleo obrero; integración de algunos sectores desocupados en el aparato burocrático, mediante trabajos no-productivos ni esenciales al mantenimiento del control político;

10. Transferencia de la ganancia media de las empresas productivas del Estado, vía subsidio a los altos precios de los productos del sector monopolístico atrasado;

11. Descenso en los costos de producción, a través de la caída relativa de los salarios, y aumento en la tasa media de ganancia de los grupos empresariales;

12. Mayor intervención imperialista del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, como un intento para controlar el manejo de la cuenta pública mediante la imposición de condiciones al otorgamiento de créditos;

13. Resurgimiento de la pequeña y mediana banca del país, que anteriormente se encontraba sometida a la desventajosa competencia de los monopolios avanzados, tanto por la disminución en la captación del ahorro y en la capacidad para efectuar préstamos, como por la imposibilidad de cobrar a las pequeñas y medianas empresas las tasas de interés y obligaciones que con ella habían contraído;

14. Fomento de la pequeña y mediana industria gracias al aumento de precios y al congelamiento de salarios, así como al incremento de la demanda generado por el sector público vía compra de bienes de consumo y no de bienes de capital al extranjero;

15. Aumento en las tasas de interés de la gran banca del país, por encima de las tasas internacionales, con objeto de retener el ahorro nacional, limitando así la obtención de nuevos préstamos al pequeño y mediano capital.

En síntesis, cabe esperar del proyecto de gobierno de López Portillo el apoyo a un género de producción de manufacturas con bajos insumos de tecnología, principalmente materias primas, agrícolas y minerales, para lo cual no se requieren grandes volúmenes de capital, de los que, por lo demás, carecen los sectores monopolísticos atrasados. Dicho proyecto está en

oposición a aquél que busca la producción de manufacturas, en países dependientes, con una alta elaboración tecnológica (véanse casos de Taiwan y Hong Kong), que producen principalmente con vías a la exportación, a través del abaratamiento de sus costos y el mejoramiento en la calidad.

Estos dos proyectos de desarrollo antitéticos, correspondientes a los dos grandes sectores del capital internacional y sus agentes locales al interior del país, reflejan claramente la ya mencionada contradicción determinante en nuestra sociedad. La variación en las políticas que los distintos gobiernos mexicanos han manifestado en las últimas cuatro décadas ha girado fundamentalmente en torno a estas dos alternativas de desarrollo.

El régimen echeverrista corrigió el proyecto de su predecesor, y ahora *parecería ser* que, por lo antes explicado, el actual gobierno empieza a modificar la política de su predecesor inmediato.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Dada la contradicción existente entre el plan de gobierno de López Portillo (septiembre, 1975) y la actual posición del nuevo régimen, este análisis tentativo está sujeto a las modificaciones mismas de la realidad mexicana y a los errores en su interpretación.